

Es necesaria una negociación política

Constituyente y transición

Piero Trepiccione*

Es importante acordar cuanto antes una hoja de ruta concertada y con apoyo de la comunidad internacional. En ella deben interactuar todos los actores políticos e institucionales para que emerja una gobernabilidad mínima; y consensuar un programa económico de largo alcance

El modelo constitucional que tenemos en el país es el republicano. Con sus bemoles, limitaciones, particularidades y afectaciones por el fenómeno polarizante que nos ha caracterizado durante los últimos veinte años, pero al fin y al cabo es el establecido en los parámetros de nuestra Carta Magna y el que reúne el mayor consenso y respaldo de la población. La República enfrenta una situación muy compleja en la actualidad. Una disyuntiva que se abre en torno a una propuesta presentada por quien ejerce la primera magistratura del país: una nueva asamblea nacional constituyente (la segunda en menos de dos décadas) que la población venezolana considera mayoritariamente, según los estudios más serios de opinión pública que se han realizado durante las últimas semanas, como innecesaria y poco democrática en sus bases comiciales. Esta nueva ANC, a decir de los principales voceros que la están promoviendo, y en particular, Hernán Escarrá, tendrá características de “suprapoder” y se enfocará en profundizar el actual modelo de gestión pública en el ámbito de la economía y la reestructuración del Estado hacia el concepto “comunal”. Dos premisas que sin duda, están asociadas a las fórmulas que se han venido empleando durante los últimos lustros y que no han tenido resultados concretos en la sustentabilidad del desarrollo.

Ahora bien, el tema clave en la discusión que se abre ante el país es el relativo a la refunda-

ción de las bases de la República –una facultad por lo demás sobresaliente en el marco de una ANC– y que puede concluir en una reformulación absolutamente distinta al concepto republicano de 1999. Y es allí donde está el meollo del asunto. Algo extremadamente delicado no debe ser decidido por una representación minoritaria de la población, sino más bien soportado en un amplio consenso de ella para que pueda tener sustentabilidad y proyección por décadas. El detalle es que las bases comiciales establecidas como parámetro de elección de los constituyentistas y la sistemática electoral que las viabiliza son contrarias a la práctica de la democracia porque sencillamente no traducen proporcionalmente la actual composición política del imaginario colectivo de los venezolanos.

¿APARTHEID POLÍTICO?

En pocas palabras, de llevarse a cabo las elecciones planteadas para el 30 de julio vamos a tener casi el cien por ciento de la representación política institucional del país con un apoyo popular que pudiera oscilar, en el mejor de los casos, entre un veinte y un treinta por ciento de la población, con el agravante que dicha representación política le impondría a la mayoría de la nación, un nuevo formato de Estado que podría dar al traste inclusive con la forma republicana de mayor consenso social entre los venezolanos.

Es obvio que la asamblea nacional constituyente en los términos planteados podría acabar con la forma republicana que conocemos. No obstante, en el escenario actual del país, es muy complicado que se pueda lograr una especie de “*apartheid* político” donde una minoría le imponga a la mayoría una forma de Estado esencialmente distinta a la establecida en la Constitución de 1999. Por lo contrario, si no hay marcha atrás y se abre un compás para una negociación política de alto nivel con un sólido y transparente acompañamiento internacional, podríamos entrar en una fase de agudización del conflicto que incrementaría notablemente los niveles de violencia que –hasta ahora– a pesar de las numerosas violaciones a los derechos humanos, no ha pasado a mayores niveles de masificación.

Independientemente de cuál sea el impacto de la constituyente si esta se llegare a aplicar o no este año, el escenario más cercano a la realidad-país tiene que ver con la finalización de un ciclo histórico en nuestra evolución política. Este ciclo comenzó formalmente a partir de 1998 con la victoria en las urnas electorales de Hugo Chávez, que dio al traste con el periodo de gobernabilidad establecido bajo los parámetros del célebre Pacto de Punto Fijo.

MARCA POLÍTICA

La marca bajo la cual se distinguió el ciclo es la llamada “revolución bolivariana” que ocupó por cerca de dieciocho años un lugar privilegiado en el imaginario colectivo de los venezolanos. Dos elementos esenciales han caracterizado el debilitamiento de la marca. En primer lugar el fallecimiento de Hugo Chávez en marzo del 2013. Su hiperliderazgo y la concentración del apoyo popular en su figura no permitió la emergencia de nombres alternativos en el seno del Gran Polo Patriótico que sirvieran de enroques para garantizar la alternabilidad del proceso bolivariano. En segundo lugar, la caída drástica de los precios petroleros en los mercados internacionales que han socavado el modelo político soportado sobre un enorme gasto público sin compensaciones en el ingreso fiscal que permitiese darle sustentabilidad sin el anclaje obligatorio a los hidrocarburos.

Esto nos permite señalar que –*grosso modo*– el país se prepara para una transición del liderazgo y del modelo que pudiera establecerse sobre un nuevo pacto de gobernabilidad.

Para visualizar el momento político actual es necesario observar detenidamente el pulso que la opinión pública venezolana viene tomando en los últimos meses. Revisando estudios y promediándolos nos damos cuenta que más de noventa por ciento de la población se identifica con un cambio político. A esto le agregamos que ese mismo porcentaje está disconforme con la situación económica actual del país señalando que

marchamos en la dirección incorrecta. Estos términos acompasados de opinión pública nos desmontan el fenómeno de la polarización general que fue la “marca” identificatoria del ciclo político que inició en 1998 con la victoria electoral de Hugo Chávez. Son cifras extremadamente contundentes que van más allá de los alineamientos políticos promovidos en polarización.

Otro elemento característico del ciclo político actual es el agotamiento sufrido por efecto de la concentración de responsabilidades en relación a la situación económica que atraviesa el país. De cada diez venezolanos prácticamente ocho responsabilizan tanto al Gobierno nacional como al primer mandatario de las consecuencias de la desaceleración de la economía y las penurias causadas por el desabastecimiento y la inflación. Esto se traduce en cansancio y remarcado en la ejecución de políticas públicas desde la perspectiva del Gobierno nacional.

TRANSICIÓN ORDENADA

Frente a este marco de opinión pública la reacción del Gobierno ha sido la de querer aferrarse al poder a cualquier precio cerrando las vías constitucionales para que la nueva mayoría que se ha ido gestando alrededor del descontento se exprese para formalizar un nuevo gobierno. En consecuencia, en la medida en que la minoría se repliegue sin favorecer salidas institucionales, los episodios de violencia política pudieran acelerarse hasta llegar a un punto de quiebre que favorezca otro posible escenario. En ese sentido, es importante acordar cuanto antes una hoja de ruta concertada y con apoyo de la comunidad internacional. En ella obviamente deben interactuar todos los actores políticos e institucionales para que emerja una gobernabilidad mínima que garantice un reacomodo de vectores de fuerzas políticas de acuerdo a su proporcionalidad en respaldo popular, y además sirva de marco para consensuar un programa económico de largo alcance que permita atacar de raíz la causalidad de los males que impactan tan negativamente nuestra realidad.

Si el liderazgo interpreta la realidad correctamente puede verse favorecida esta opción de cambio en una forma relativamente ordenada que recaiga en una figura de consenso que cumpla un rol similar al que le tocó cumplir a Valentín Paniagua en el Perú, Patricio Alwyn en Chile o el propio Ramón J. Velazquez en Venezuela. Es altamente necesario rescatar la política y sus métodos para dirimir diferencias.

*Coordinador general del Centro Gumilla Barquisimeto.